

Dictaduras y Organizaciones Guerrilleras en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: Ejercicio de un Análisis Comparativo

César Tcach



Cuando en 1964 los militares brasileños dieron el puntapié inicial a la nueva oleada de golpes militares en el cono sur de América Latina, la guerrilla no existía. Los primeros grupos guerrilleros brasileños surgieron a partir de 1967: la Alianza de Liberación Nacional, promovida por el ex dirigente del PCB, Carlos Marighela, el guevarista MR 8 de Octubre, Vanguardia Popular Revolucionaria y Vanguardia Armada Revolucionaria (asociadas a la figura del ex capitán del ejército brasileño, Carlos Lamarca), la guerrilla de Araguaia (impulsada por el maoísta PC Do Brasil al sur del Estado de Pará), la protoguerrilla de la Serra Do Caparaó (orientada por el líder histórico de varguismo, Leonel Brizola), y el MEP, Movimiento de Emancipación del Proletariado (integrado años después al PT).¹

Tampoco es posible correlacionar el golpe militar uruguayo de 1973 con la amenaza de los tupamaros. Su debilidad militar había sido advertida en 1971 por Byron Engle, funcionario del Departamento de Estado norteamericano, que supervisaba la lucha antiguerrillera en Uruguay:

(...) los Tupamaros no tienen diez pies de altura. A pesar de su encenderse con brillo por espectaculares y sensacionales represalias contra objetivos selectos, relativamente buena seguridad operativa y prensa favorable. Si uno mira las muchas operaciones donde hicieron chapuza y de las cuales los registros de la policía están repletos, aparece inmediatamente evidente que un esfuerzo sostenido contra ellos puede tener éxito».²

Ese esfuerzo requería una acción coordinada en los planos judicial, policial, político y militar, pero no un golpe de Estado. Todas las fuentes de la época –tanto uruguayas como norteamericanas– indican que los tupamaros habrían sido aplastados entre abril y septiembre de 1972, fecha en que es encarcelado su máximo dirigente Raúl Sendic.

En Chile, la fuerza de la teoría del tránsito institucional al socialismo anuló en su matriz las posibilidades de desarrollo de grupos guerrilleros. El propio Andrés Pascal Allende –sobrino de Salvador Allende e integrante de la conducción del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria)– reconocía:

Rechazamos la equivocada interpretación de la guerra revolucionaria cubana que circulaba en nuestra época y que se conoció como «foquismo». Es decir, la creencia de que dadas todas las condiciones objetivas para la revolución bastaba encaramarse en una montaña con un grupo guerrillero, o realizar acciones armadas desde la clandestinidad urbana, para generar las condiciones subjetivas».³

Es por eso que las tareas militares del MIR se orientaron a la autodefensa de la propia organización, a estimular y proteger la acción directa de las «masas» (las ocupaciones de tierras fueron un ilustrativo ejemplo), y a formar parte de la custodia presidencial de Salvador Allende.⁴ En el momento del golpe militar –septiembre de 1973– el MIR no alcanzaba a reunir más de doscientas armas de guerra.⁵ Es posible suponer que su debilidad en ese plano se había acentuado por la puesta en práctica, poco tiempo antes, de la Ley de Control de Armas. Cabe recordar que tras el frustrado golpe militar de fines de junio –conocido como el «tanquetazo»– el gobierno de Allende intentó aproximarse a la Democracia Cristiana implementando la mencionada norma, que facilitaba el desalojo de fábricas y tierras ocupadas, así como los «rastrillajes» en busca de armas.

En el caso argentino, las organizaciones armadas surgieron con posterioridad al golpe militar del general Onganía, en 1966, es decir, se constituyeron a partir de la lucha antidictatorial. Tuvieron un período exitoso de crecimiento durante alrededor de cuatro años, entre 1970-73/74. En contraste con los tupamaros uruguayos –una guerrilla sin partido– y con el MIR chileno –un partido sin ejército–, el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) argentino fue fruto de la decisión de un congreso partidario, el quinto realizado por el Partido Revolucionario de los Trabajadores desde su fundación en 1965.

La revista militar española *Defensa*, reconstruía en 1979 el itinerario de su declive: en 1974 fracasó en acciones militares de enverga-

dura en Catamarca y en Villa María; en mayo y octubre de 1975 sufrió derrotas decisivas en su foco rural instalado en Tucumán (en las localidades de Manchalá y San Gabriel de Acherá, respectivamente); ante el fracaso de la guerrilla rural «Santucho decide montar una gran operación contra una unidad del EA del Gran Buenos Aires (cordón que rodea a la Capital Federal). El objetivo era recuperar el prestigio de la organización».⁶ Su resultado fue la aplastante derrota guerrillera en el asalto al arsenal de Monte Chingolo en diciembre de 1975. Al fracaso rural, se sumaba ahora, el fracaso urbano: el ERP fue derrotado antes del golpe militar del general Videla en 1976. No es de extrañar. En la percepción militar siempre se lo consideró «el más coherente políticamente» de todos los grupos armados, y por consiguiente, su liquidación «fue la primera prioridad del EA cuando la lucha antisubversiva en Argentina pasó de la simple responsabilidad policial, a la de las FF.AA. en su conjunto».⁷

Los Montoneros también habían iniciado una curva descendente. Poco después de la muerte de Perón decidieron –en septiembre de 1974– priorizar la vía militar y retornar a la clandestinidad. Acertadamente, Pilar Calveiro ha señalado al respecto que esta decisión condenó a muerte a sus organizaciones de base territoriales, sindicales y estudiantiles, vinculadas orgánicamente a la organización.⁸ Al hostigamiento y persecución de sus militantes y simpatizantes, cabría añadir su ineficiencia para realizar acciones militares de una envergadura mayor al de la bomba, el secuestro, o el simple asesinato: en octubre de 1975 fueron claramente derrotados en el ataque al Regimiento 29 de Infantería ubicado en Formosa. A tenor de lo expuesto, es posible comprender el rapto de sinceridad del general Díaz Bessone en 1982:

El motivo del derrocamiento del gobierno peronista en marzo de 1976, no fue la lucha contra la subversión. (...) Nada impedía eliminar a la subversión bajo un gobierno constitucional. (...) La

justificación de la toma del poder por las Fuerzas Armadas fue clausurar un ciclo histórico».⁹

Paradójicamente, su apreciación habrá de coincidir —aunque desde una perspectiva antitética— con la expresada en 1987 por Pedro Cazes Camarero —otro director de la revista *El Combatiente*, órgano del PRT—, quien reconocía:

El golpe no se dio para liquidar a la guerrilla, sino para liquidar a ese inmenso movimiento popular, democrático, revolucionario, nacional, que había fructificado en las luchas contra la dictadura en los años sesenta».¹⁰

La coincidencia retrospectiva, establecida desde memorias antagónicas, colabora con la reconstrucción e interpretación historiográfica. Es significativo que años después de los acontecimientos, algunos ex dirigentes guerrilleros y algunos ex jefes militares coincidan en distinguir las causas del golpe de su pretexto o justificación discursiva. Porque, en efecto, los golpes militares no fueron —en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay— producto de un imperativo bélico (derrotar a la guerrilla). Fueron, más bien —en consonancia con el planteamiento de Guillermo O'Donnell—¹¹ la respuesta a la necesidad de extirpar de raíz:

1. Los comportamientos colectivos que cuestionaban la naturalidad de las relaciones sociales capitalistas, o al menos, suponían un obstáculo para su «normal funcionamiento»: huelgas generales, indisciplina laboral, desobediencia a la autoridad en los lugares de trabajo. Por cierto, este aspecto contenía un elemento preventivo destinado a eliminar todas aquellas organizaciones —sindicales y partidarias, armadas o no— que estimulasen ese tipo de comportamientos.
2. La transgresión microsocia, expresada en la cotidianeidad molecular de las relaciones sociales en dimensiones como la familia, la educación, la vestimenta, la música y

los valores culturales. Estas cuestiones se insertaban en una suerte de clima festivo en el que se ponían en cuestión las jerarquías subjetivas del poder.

3. Gobiernos reformistas y tibios con los transgresores (Chile y Brasil), impotentes e ineficaces (Argentina) o insuficientemente militarizados (Uruguay). En este último caso, cabe recordar que a partir de septiembre de 1976 la dictadura comisarial uruguaya cedió paso —merced a las actas institucionales de Aparicio Álvarez— a una dictadura con pretensiones fundacionales.¹²

En relación con los aspectos precedentes, O'Donnell utilizó el concepto de «crisis de dominación celular». Su virtud principal es la de expresar la incapacidad de las clases dominantes para constituirse en clases dirigentes, es decir, para imponer sus valores y pautas de conducta. Empero, radicales y peronistas en Argentina, blancos y colorados en Uruguay, nacionales y demócratas cristianos en Chile, conservaban en dosis nada desdeñables una gran capacidad de dominación y manipulación sobre el escenario electoral. Lo que las clases dominantes y las elites políticas no podían hacer debe asociarse a lo que sí podían hacer.¹³

Subversión empresarial e irreverencia social

Un común denominador recorre el hilo conductor de los procesos que desembocaron en los golpes de Estado de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: la apuesta a favor del derrumbe institucional, promovida por el gran capital, nacional y extranjero. En Chile, se produjeron a partir de octubre de 1972 huelgas empresariales con fines desestabilizadores que forzaron a la Democracia Cristiana a abandonar su posición centrista para pasar a una oposición más dura, a la vez que alimentaban la politización golpista de las Fuerzas Armadas.¹⁴ En Brasil, los latifundistas bajo la dirección de la Sociedad Rural iniciaron en 1963 la forma-

ción de milicias armadas para hacer frente a la amenaza de reforma agraria del gobierno de Goulart, mientras que los industriales de San Pablo y Río de Janeiro fundaban instituciones destinadas a coordinar las campañas antiguubernamentales (como el Instituto Brasileño de Acción Democrática y el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales).¹⁵ En Uruguay, la génesis del Frente Amplio —quien se estrenó en 1971 obteniendo el 30% de los votos en Montevideo— creó un nuevo fantasma: el de un segundo Chile. Esta posibilidad, preocupaba más a la embajada norteamericana que el peligro militar tupamaro, y permeabilizaba los círculos empresariales.¹⁶ No en vano, un día antes del golpe de Estado, empresarios e inversores de *Business International* se reunieron con el golpista general Gregorio Álvarez y otros jefes militares para pedirles una acción redentora que terminara con las huelgas y la politización obrera.¹⁷ En Argentina, la Asociación Permanente de Entidades Gremiales Empresariales (APEGE) desplegó una acción desestabilizadora militante. Sus documentos, no vacilaban en reivindicar el «memorable paro» patronal del 16 de febrero de 1976 como la antesala del golpe de Estado. Para la APEGE, era necesario que los militares liberaran al país tanto de «la acción disociadora» de un «gobierno que lo llevó al mayor caos que registra su historia», como de la subversión «apátrida».¹⁸ El entusiasmo por el gobierno de los generales fue compartido por la Sociedad Rural, la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y la Cámara Argentina de Comercio, entre otras instituciones.

Ciertamente, el miedo de las clases dominantes se correlacionaba con niveles de amenazas reales y potenciales. Éstas eran alimentadas por la lógica de la radicalización de los actores sociales, agravada en algunos casos —como Brasil y Chile— por la permeabilidad de gobiernos reformistas.

En Brasil, el programa de reformas del gobierno de Goulart implicaba redefinir la inserción de los militares (Proyecto de derecho al

voto de los suboficiales), de los grandes propietarios (Proyecto de Reforma Agraria y Estatuto del Trabajador Rural), y del movimiento obrero en un clima de movilización social que alcanzó su cenit en la llamada «huelga de los 700.000», realizada en San Pablo en octubre de 1963.¹⁹ El 13 de marzo de 1964, Goulart reunió casi medio millón de personas en Río de Janeiro y dio a conocer varios decretos, entre ellos los de nacionalización de refinerías petroleras privadas, limitación de los precios de los alquileres urbanos, e incautación de tierras al borde de las carreteras. Fue derrocado al mes siguiente.²⁰

En Chile, el gobierno de Salvador Allende era considerado una amenaza aun antes de su asunción. Más aún, se elaboraron planes —con el beneplácito norteamericano— para impedirlo. Luego, la predisposición gubernamental a aceptar la rebeldía plebeya, morigerándola en algunos casos y legitimándola en otros (recuérdese la ocupación de fábricas y tierras), ponía contra las cuerdas algo más que la tolerancia al pluralismo. Al respecto, Tomás Moulian elaboró un lúcido retrato:

Hombres sin rostro que se sintieron protagonistas, que en su fantasía vieron debilitarse los poderes atávicos que los habían sojuzgado y que tomaron la palabra, se apoderaron de fondos no incorporados en ninguna planificación racional ni realista, sobrepasaron los límites estrechos del derecho de propiedad y desafiaron a la autoridad porque se sintieron interpelados, llamados a ser actores, a producir su propio poder (...) Era la revolución lo que se celebraba y lo que en realidad comenzaba a vivirse, pese a la patética escasez de recursos de poder.²¹

En el contexto que se acaba de describir, la oposición unida en torno a la CODE —Confederación de la Democracia— promovió una política de paros empresariales —entre ellos la recordada huelga de los camioneros y el transporte— que suponían más de un guiño al desabastecimiento y el mercado negro. Cabe recordar que la tradición empresarial chilena era reacia a las concesiones sociales. Ya en un



período precedente, durante el gobierno demócrata cristiano del presidente Frei, habían reaccionado virulentamente frente a su ensayo de apañar una medida reformista agraria. Con mayor razón

fue frontal contra Allende, cuando la retórica de la revolución estaba a la orden del día. No obstante, la invocación al golpe militar se hacía en nombre de la legitimidad democrática. Tenía un anclaje legitimista y restaurador —del pasado institucional— que tras la caída de Salvador Allende fue violentamente negado.²²

La tendencia a la radicalización de los actores sociales también recorría Argentina y Uruguay. En este, la fisura del secular monopolio bipartidista —a partir de la exitosa irrupción electoral del Frente Amplio—, la consolidación a partir de 1966 de la CNT (Confederación Nacional de Trabajadores) bajo liderazgo comunista, y el giro a la izquierda del Partido Socialista (asumido en su XXXVII Congreso), eran indicadores de ese proceso. A tenor de estas circunstancias, los analistas del Departamento de Estado norteamericano recomendaban dividir al Frente Amplio estimulando la formación de una nueva fuerza de centro izquierda que excluyese al PC y a los sectores que simpatizaban con los tupamaros.²³ Esta hipótesis de trabajo, empero, distaba de ser viable, y la balanza se inclinó —anticipándose a lo que ocurriría en la otra orilla del Río de la Plata— por la solución dura propugnada por Bordaberry —propietario ganadero y admirador de la dictadura brasileña— orientada a practicar una operación quirúrgica.²⁴

En contraste con el caso uruguayo, en Argentina la izquierda no suponía un peligro en términos electorales, pero las raíces de los Montoneros en la sociedad era mucho más amplias y profundas que la de los Tupamaros —los primeros habían crecido inicialmente con el beneplácito del mayor líder carismático que tuvo la Argentina del siglo XX, Juan Perón— y la fuerza del movimiento obrero era considerablemente superior.²⁵

La intervención a grandes sindicatos durante la primavera de 1974 —como SMATA y Luz y Fuerza en Córdoba, o la Federación Gráfica— la persecución de sus dirigentes, la represión policial y los asesinatos parapoliciales de las «3A», habían golpeado duramente a los sectores más combativos del movimiento obrero. Cabe recordar que el artículo 5 de la Ley de Seguridad aprobada en septiembre de 1974, castigaba con prisión de 1 a 3 años a quienes participasen de huelgas ilegales. La protesta obrera disminuyó de 30 conflictos mensuales en junio de 1974 a menos de 12 en marzo de 1975.²⁶ Este mismo mes se inició un gran operativo represivo para descabezar al sindicalismo clasista de Villa Constitución: sus líderes más importantes fueron a parar a la cárcel. Con la ley y sin ella, la derecha peronista parecía haber ganado la batalla. Pero no estaba todo dicho. En junio, el ministro de Economía Celestino Rodrigo (hombre de confianza del temido ministro de Bienestar Social, López Rega) resolvió una devaluación de 100%, generando aumentos incluso superiores en tarifas y combustibles. La reacción obrera fue contundente. Por primera vez desde la derrota de 1971, los trabajadores de *Concord* y *Materfer* (FIAT-Córdoba) realizaron asambleas generales para movilizarse activamente e intentar marchar hacia el centro de la ciudad. Algo similar ocurría entre los otrora derrotados trabajadores de *General Motors* de la planta de San Martín. Según relataba un activista: «En cinco años se habrán hecho cuatro o cinco asambleas informativas en las cuales la gente

se limitaba a escuchar. Ahora se hace una todas las semanas a pedido de la gente y tienen carácter resolutivo». ²⁷ Ni aislados ni casuales, estos hechos ilustraban paradigmáticamente la reactivación del ciclo de protesta. En Santa Fe, los obreros del centro industrial de Sauce Viejo, a 15 Km. de la capital, marcharon hacia ésta junto a pobladores de la zona: frente a la represión, nuevamente las barricadas impregnaban el repertorio de confrontación. Como fruto de la nueva oleada de movilización social, surgieron las *Coordinadoras de Gremios, Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados en Lucha*, en los principales centros urbanos: Capital y Gran Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Córdoba y Mendoza. El programa del Segundo Plenario General de la Coordinadora de gremios, comisiones internas y cuerpos de delegados en lucha de Capital y Gran Buenos Aires, propiciaba la creación de una «Coordinadora Nacional» y combinaba las exigencias económicas (aplicación de la Ley del salario mínimo, vital y móvil, reapertura de las paritarias) con las políticas. Entre ellas, la renuncia del gobierno de Isabel Perón, la derogación del Estado de Sitio y la investigación de la organización parapolicial «Acción Anticomunista Argentina». También exigía el «pleno respeto a la soberanía popular». ²⁸

Ciertamente, las coordinadoras no eran embriones de soviets. Exigían, sí, libertades públicas, seguridad física para la militancia y la renuncia de un gobierno que avalaba el terror parapolicial. No se convoca a la revolución —pese a ser expresión de una tendencia a la radicalización social— sino al respeto a la soberanía popular. ²⁹ Empero, las coordinadoras marcaban una incipiente e intensa repolitización del movimiento obrero, orientada a enfrentar al gobierno peronista de María Estela Martínez, cuestionar al sindicalismo burocrático y ampliar la democracia en todos los terrenos de la vida social. ³⁰ Como en Brasil, Chile y Uruguay, también en Argentina la burguesía tenía motivos para sentirse amenazada.



El nivel de amenaza puede explicar el autoritarismo y la prepotencia de las clases dominantes, pero no explica *per se* el recurso a un tipo de dictadura: institucional, fundacional y soberana. ³¹ Ésta fue corolario de un proceso doble de maduración política (creciente autonomía corporativa de los militares) e ideológica (hegemonía del principio de la guerra interna); fenómenos que se imbricaban con la búsqueda de una reestructuración no concertada ni democrática del capitalismo en el cono sur de América Latina.

Guerra contra ciudadanos y actores colectivos: la influencia francesa y norteamericana

Entre 1954-55, tras el fin de las experiencias populistas de Vargas en Brasil y de Perón en la Argentina, se afianzó progresivamente la convicción militar según la cual estos países estaban viviendo una guerra interna con proyecciones internacionales. Basta ceder las palabras a los jefes militares argentinos de la década de los 60, —época en que los dos principales partidos de izquierda eran el Partido Socialista, de larga tradición reformista y parlamentaria, y el Partido Comunista, empeñado en su prédica a favor de la vía pacífica al socialismo en consonancia con la política de «coexistencia pacífica» defendida por la URSS— para ilustrar su itinerario doctrinario.

En 1959, el coronel Osiris Villegas se desempeñaba como Jefe de Estado Mayor de la cordobesa IV División de Ejército. Pronto ascendido a general, había comenzado a escribir su libro *Guerra Revolucionaria Comunista*, cuya

primera edición fue realizada por la Biblioteca del Oficial del Círculo Militar Argentino en 1962. En el prólogo escrito por la dirección de esa institución se advertía: «La guerra se desarrolla ya dentro de nuestras fronteras», y compartiendo las conclusiones de Osiris Villegas añadía que la democracia no puede ser

coexistencia pacífica inadmisible y suicida con el enemigo declarado de la nacionalidad. Como lo expone el autor, esta ideología antinacional, cuando cuenta con la inoperancia y pasividad de las autoridades, va infiltrándose gradualmente en todas las estructuras del poder nacional. Por vía de ese proceso, ejecutado sutilmente en el ámbito del Estado y partidos políticos, organizaciones económicas y financieras, entidades gremiales, institutos de enseñanza, etc. puede ser que la mayor parte de ese poder esté en manos del enemigo.³²

Como puede apreciarse, las Fuerzas Armadas eran renuentes a aceptar la «coexistencia pacífica» con los presuntos enemigos de la nación. Y en la lista de enemigos, Osiris Villegas incluía Bibliotecas Populares, teatros independientes, revistas culturales, asociaciones científicas y todas aquellas instituciones que sirven al comunismo «en forma directa, velada o encubierta».³³

En 1960, el Comandante de la IV División de Ejército, general Edgar Joaquín Landa, señalaba:

Las fuerzas armadas están en guerra. (...) No reconocer el estado de beligerancia es quedar detrás del movimiento y no participar en lo que debe ser una verdadera cruzada nacional. Desgraciadamente, existen todavía muchos argentinos que se niegan a vivir esta realidad, con lo que cooperan, inconcientemente, con la acción de infiltración del enemigo. Pero, repito, para las Fuerzas Armadas, con o sin apoyo, la lucha contra el comunismo es a muerte. No hay transacciones ni treguas.³⁴

De sus palabras es fácil colegir que la mayoría de la sociedad se negaba a admitir la existencia de una guerra o «estado de belige-

rancia». Pero su advertencia era también una premonición: los «tímidos», los que colaboran sin darse cuenta, «inconscientemente», con el enemigo definido por las FF.AA. también serían castigados.

Dado que no existían ejércitos de combatientes que enfrentasen a las FF.AA., la argumentación militar ponía énfasis en destacar que no se trataba de una guerra clásica, sino que en esta nueva forma de guerra era crucial la propaganda y la acción psicológica. Así, el general Mario Artuso, jefe de la II División de Ejército, expresaba ese mismo año:

Nuestro país está en guerra. Éste es un hecho positivo que el Ejército debe afrontar. El enemigo se encuentra activo y trata de imponer doctrinas foráneas, y por una acción psicológica y de falsos espejismos pretende alterar el alma de nuestro pueblo.³⁵

En esta particular visión, el «alma de nuestro pueblo» podría resumirse en el título que el provicario de las FF.AA. monseñor Victorio Bonamin diera a su conferencia en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba: «La Cruz y la Espada».³⁶ Este modo de ver las cosas, ajeno a la sensibilidad liberal democrática que contempla el derecho de opinión, era compartido por algunos sectores civiles vinculados a la jerarquía eclesiástica. En febrero de 1961, con motivo del triunfo de Alfredo Palacios en los comicios celebrados ese mes en Capital Federal, el editorial del diario católico cordobés *Los Principios*, expresaba:

No ha triunfado un partido determinado sino una amalgama de extremistas. (...) El triunfo izquierdista es una voz de alerta. No hay que dejarse arrastrar por los acontecimientos. (...) los zurdos no son mayoría. Sólo de los demás depende que tampoco lo sean accidentalmente.³⁷

Nuevas palabras convertidas en anatema y estigma, como «zurdos», comenzaban a incorporarse al vocabulario político periodístico. El uso sistemático del término «infiltrados» fue, asimismo, el correlato de un imaginario que

EL PASADO DEL PRESENTE

suponía un país en guerra. El tema de la «infiltración» en los partidos políticos se convirtió pronto en lugar común del universo simbólico de los militares.

Pero la doctrina de la guerra interna no era un invento argentino. Su irradiación partía de la Escuela Superior de Guerra, de París, donde se habían formado numerosos oficiales argentinos y uruguayos en la década del cincuenta. En febrero de 1960, un acuerdo secreto entre Francia y Argentina permitió establecer una misión permanente de asesores militares franceses, entrenados en las técnicas de la guerra de contrainsurgencia en Argelia.³⁸ Ese mismo año, se inauguró en la Escuela de Guerra de Montevideo, un ciclo de conferencias sobre guerra antisubversiva que fue el prefacio del primer Curso interamericano de guerra contrarrevolucionaria realizado en Buenos Aires en octubre de 1961.³⁹

En los años siguientes, tras el fracaso en Argelia, la influencia de la escuela francesa cedió paso a la norteamericana. El 18 de marzo de 1964, el diputado nacional Juan Carlos Coral presentó un proyecto solicitando:

la remisión a esta Cámara de la nómina completa de los militares argentinos que se encuentran en Panamá, cursando estudios de «guerra revolucionaria» bajo la dirección de los Estados Unidos de América.

Fundamentaba su pedido en una cuestión de principios:

No queremos erigir nuestro continente en un vasto escenario de la guerra ideológica. Los ejércitos nacionales deben formular sus propias doctrinas de guerra, liberándose de las directivas hegemónicas y antipacifistas del Pentágono. Jefes y oficiales de Indoamérica no pueden seguir estudiando con profesores yanquis las técnicas más efectivas para la represión de los pueblos colonizados. EL Ejército de San Martín deberá encontrar la prolongación de sus glorias en pautas más nobles que éstas de ser, potencialmente, guardia pretoriana del capitalismo.⁴⁰

Por cierto, no era ésta la opinión del general Alejandro Lanusse, entusiasta defensor de la escuela norteamericana. Al despedir, ese mismo año, la delegación argentina a Panamá, sostuvo:

Habréis de cumplir una nueva misión junto a soldados de un Ejército que es baluarte de la libertad y el orden, no sólo de su propio país sino también del mundo entero.⁴¹

El panegírico del ejército norteamericano, «baluarte de la libertad en el mundo entero», no podía ser más completo.

En 1964, también en Brasil la influencia norteamericana —de más larga tradición que en Argentina— se hacía sentir en el plano de la doctrina y las prácticas militares. El mariscal Castelo Branco había liderado un golpe de Estado con el beneplácito de su viejo amigo personal, el general Vernon Walters, agregado militar de la embajada en Brasilia. Según Moniz Bandeira, poco antes el emisario de la CIA Dan Mitrione (años después asesinado por los tupamaros en Uruguay), había tenido a su cargo «la organización del contrabando de armas destinadas a la formación de grupos paramilitares golpistas».⁴² En 1964 se inauguró en Manaus, pleno corazón de la selva amazónica, un Centro de Instrucción de Guerra, donde según diversos testimonios, los instructores eran boinas verdes norteamericanos y se enseñaba la tortura con prisioneros vivos.⁴³

En el caso chileno, la influencia de la doctrina de la seguridad nacional parece haber sido menor en términos comparativos. El largo período de estabilidad política que se extendió entre 1932 y 1973, alimentó la ilusión de la excepcionalidad de Chile y dio sustento a la percepción según la cual los militares aceptarían los cambios impuestos por la fuerza de las urnas y la pacífica movilización de las masas. Esta ilusión capturó no sólo a Salvador Allende y el Partido Comunista. El propio Miguel Henríquez —secretario general del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria)— destacó dos

meses antes del golpe de Estado de septiembre de 1973, la envergadura de los «oficiales honestos y altos oficiales antigolpistas» que junto a suboficiales y soldados habían hecho fracasar el «tanquetazo» del 29 de junio.⁴⁴ Poco después, empero, los militares chilenos abrazarían públicamente la doctrina de la Seguridad Nacional con una intensidad análoga a la de los conversos a una fe redentora. Numerosos altos cargos de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) se incorporaron a los cursos de la SOA (School of Américas).

La doctrina de las fronteras ideológicas y de la guerra interna —en gran medida un subproducto de la «guerra fría» en el plano internacional— redefinió la función de los ejércitos sudamericanos y tendió a imponer artificialmente una lógica que legitimaba la presencia corporativa de las Fuerzas Armadas en la política latinoamericana; permitía a los grandes grupos económicos justificar la represión a los reclamos obreros y populares; y estaba en consonancia con la política anticomunista de los EE.UU. y con las políticas de contrainsurgencia ensayadas por un puñado de países centrales que aún conservaban territorios coloniales. Por cierto, esa influencia fue desigual. El sistema de partidos en Argentina y Brasil era históricamente mucho más débil que en países como Chile y Uruguay, con tradiciones cívicas y pluralistas más arraigadas, y por consiguiente, provistos de mayores defensas contra los ataques militares a la democracia. Pero a la postre, esa lógica —que durante largos años fue rechazada por los partidos políticos, los sindicatos, los centros estudiantiles, etc.— terminó imponiéndose, aniquilando la fe cívica de los ciudadanos y minando la confianza de «los de abajo» —pero también de los «de arriba»— en las virtudes de la democracia política.

Cinco hipótesis sobre la violencia revolucionaria

¿Por qué millares de jóvenes decidieron abrazar la lucha armada? ¿Cuáles fueron los motivos que los condujeron a identificar la

política con el lenguaje de las barricadas, los actos relámpagos y las bombas molotov? ¿En qué medida los sectores populares legitimaron el ejercicio de la violencia organizada? ¿Cómo era experimentada subjetivamente la relación entre ética y violencia? ¿Sobre qué claves operó el triunfo del militarismo en el interior de las organizaciones? Es posible formular las siguientes directrices de investigación.

Primera hipótesis: la lógica del partisano

El hilo conductor del razonamiento precedente remite a la existencia de dictaduras, la clausura de los canales políticos institucionales, la desvirtuación de los mecanismos democráticos de mediación, la militarización de la política, y en definitiva, a la inexistencia de un sistema plural de partidos. De este modo, la resistencia popular a ese proceso habría dado lugar a la constitución de las organizaciones armadas: los guerrilleros argentinos, brasileños, uruguayos y los militantes del MIR chileno podrían ser concebidos así —al modo de legendarios partisanos— como combatientes por la libertad y la democracia. No se trataría de militares sino de civiles armados. Desde esta óptica, la lógica del partisano enlaza con el derecho de resistencia a la opresión (cuyos orígenes se remontan al Derecho natural y a las redefiniciones introducidas por los liberales ingleses a partir de Locke).

En el caso argentino, existen tres versiones de la lógica del partisano. La versión peronista toma como punto de partida el bombardeo a Plaza de Mayo y el derrocamiento de Perón en 1955. La masacre efectuada por los aviadores contra masas indefensas, la caída de un gobierno electo por la voluntad popular y la posterior proscripción de su líder, serían los jalones decisivos en un proceso que condujo primero a la resistencia —utilizando múltiples formas de lucha— y luego a la guerrilla.

Una segunda versión, predilecta en la izquierda no peronista, remite al golpe militar

del general Onganía en 1966. Ese golpe marcó un salto cualitativo en la evolución ideológica de los militares argentinos, quienes transitaron del antiperonismo al antipartidismo generalizado: se ilegalizaron todos los partidos, se prohibieron los centros de estudiantes, se liquidó la libertad de prensa y llegó a censurarse hasta el uso de minifaldas en la administración pública.

Dos militares argentinos —de raigambre democrática— adhieren respectivamente a sendos puntos de vista. El capitán José Luis D'Andrea Mohr (egresado del colegio militar en 1961) sostuvo que la proscripción del peronismo «es el verdadero punto de partida de toda la violencia en Argentina». El coronel Luis César Perlinger, en cambio, destacó en un diálogo con el ex dirigente guerrillero Pedro Cazes Camarero: «Onganía originó la reacción de Camarero y su generación».⁴⁵ En esa reacción, la violenta rebelión popular conocida como el «cordobazo» —en consonancia con otros acontecimientos como el Mayo francés y el Tlatelolco mexicano— habrían marcado un punto de inflexión en el imaginario político. Al respecto, el agudo periodista Julio César Moreno escribió: «En el 66 se defendía la democracia constitucional y las elecciones libres, después del 69 se proclamaba la revolución».⁴⁶

Una tercera versión de la lógica del partisaño, —integradora de las precedentes—, concibe a las organizaciones armadas de los 70 como el corolario de un ciclo de larga duración cuyo itinerario comenzó con el estado de *subversión institucional*, que inaugurado por el golpe militar del general Uriburu en 1930 se extendió de la mano de los conservadores y sus prácticas de sufragio fraudulento hasta 1943, año en que un nuevo golpe militar disolvió los partidos políticos. A partir de 1946, el Gobierno peronista tendió a limitar el ejercicio efectivo de los derechos democráticos y republicanos. En 1948 aprobó la Ley de Organización de la Nación para Tiempos de Guerra (Ley 13.234), que otorgaba facultades judiciales al Poder Ejecutivo y autorizaba la participación de las Fuerzas

Armadas en la represión interna. Esta ley fue aplicada por primera vez en 1951, a raíz de la huelga de los obreros ferroviarios. En 1955, fue la propia Iglesia católica quien junto a los partidos tradicionales co-organizaron la violencia política —a través de los célebres «comandos civiles»— para provocar el derrocamiento del presidente electo en 1951. Luego, vinieron 18 años de proscripción de la fuerza política mayoritaria —el peronismo— realizada en nombre de los principios democráticos. Desde finales de los años 50, la idea de que el país estaba en guerra contra un enemigo interno se convirtió en doctrina oficial de los militares argentinos. En ese contexto, el Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) —instrumentado por Frondizi sobre la base de la ley de 1948— les permitió a los militares participar en la represión de la izquierda y el peronismo, a los que se identificaba con los enemigos de la patria. En esta perspectiva, finalmente, el golpe militar del general Onganía en 1966, coronó el proceso de exclusión política y expulsión de los disidentes a los márgenes de la ilegalidad.

La perspectiva enunciada presenta, no obstante sus virtudes, dos puntos débiles: uno de orden cultural y otro de carácter histórico. El primero reside en suponer que la cultura política autoritaria no permeabilizó también a los sectores populares y a las propias organizaciones armadas. El segundo remite al post-1973. La primavera democrática inaugurada aquel año significó no sólo la libertad de los presos políticos sino también la apertura de amplios espacios para el ejercicio de los derechos democráticos. Empero, las acciones armadas no se interrumpieron. Baste recordar el asesinato del sindicalista más cercano a Perón, José Ignacio Rucci, por los Montoneros o las espectaculares acciones del ERP en Azul y Sanidad. Por consiguiente, la violencia no puede ser entendida sólo en términos de mera lucha antidictatorial, o en una mirada de mayor aliento, de respuesta al largo ciclo de autoritarismo y democracia ficticia iniciado en 1930.

Las dificultades para aplicar la lógica del partisano al caso uruguayo deriva de dos características centrales que lo diferencian del caso argentino: la estabilidad institucional y la centralidad partidaria (en contraste con la historia de golpes militares y primacía de las mediaciones corporativas en la otra orilla del Río de la Plata).⁴⁷ La pregunta obligada es entonces, ¿cómo explicar, desde esa lógica, el surgimiento de los tupamaros en la sedicente «Suiza de América del Sur»? Ciertamente, esta organización se gestó varios años antes del golpe militar de 1973. Su primera Convención Nacional data de 1966, y su primer documento público de diciembre de 1967. Su génesis fue permeabilizada por un contexto internacional marcado por el golpe militar en Brasil (1964), la invasión a Santo Domingo (1965) y el golpe militar en Argentina (1966). En rigor, Uruguay no fue ajeno al giro autoritario. En 1965, el gobierno comenzó a implementar por decreto, las denominadas «Medidas Prontas de Seguridad» que prohibían las huelgas y, más aun, «toda propaganda oral o escrita sobre paralización de servicios públicos, paros o huelgas». Se incluía en la prohibición la difusión de noticias sobre las mismas, y se disponía, además «prohibir las reuniones que, a juicio de la autoridad puedan presumiblemente, conducir a los resultados previstos en la anterior disposición y clausura de los locales en que se efectúen esas reuniones». A juicio del gobierno, se trataba de poner punto final al desborde sindical y a la «subversión creciente».⁴⁸ Al año siguiente, una reforma constitucional incrementó considerablemente los poderes presidenciales. Se instauró un Ejecutivo unipersonal (antes era colegiado) con amplios poderes de veto y de injerencia sobre los derechos individuales y las libertades públicas. Para el editorial de una publicación influyente en la intelectualidad de izquierda, *Marcha*, este proceso conducía a «montar en la sombra la máquina de la dictadura».⁴⁹ La realidad parecía ser condescendiente con sus presagios. Tras la

asunción de Pacheco Areco como Presidente de la República en diciembre de 1967 —por fallecimiento del presidente Gestido— se detuvo a centenares de militantes políticos y sociales, se clausuraron publicaciones —como *El Sol*, perteneciente al Partido Socialista— y se prohibieron diversas organizaciones de izquierda. La hora de las fronteras ideológicas había llegado también a Uruguay. En 1971, Pacheco Areco ordenó la participación de los militares en la represión interna. Al año siguiente, su sucesor Juan María Bordaberry, quien representaba el continuismo pachequista, hizo aprobar en el Parlamento el Estado de Guerra Interno. En febrero de 1973, tras haber derrotado a la guerrilla, las fuerzas armadas redoblaban su apuesta a efectos de eliminar la «subversión política» y la «corrupción».

El proceso que se acaba de describir fue interpretado de modo diverso por los académicos uruguayos. El sociólogo Gerónimo de Sierra caracterizó al pachequismo en términos de «dictadura constitucional». Gerardo Caetano, José Rilla y Silvia Dutrenit han preferido definirlo en términos de «ajuste autoritario». Fuera del ámbito oriental, Guillermo O'Donnell, sostuvo que la especificidad del Estado autoritario uruguayo residió en no ser el producto de un golpe militar —como en Argentina y Brasil— sino que «se fue plasmando mediante un avance continuo de las Fuerzas Armadas en el control de la sociedad y el aparato estatal».⁵⁰ Su punto de vista, coincide con el de Liliana De Riz:

El Uruguay pachequista puso fin al largo ciclo político batllista. La sociedad uruguaya ingresó a la dictadura (...) de modo gradual. Los partidos políticos, al votar en el parlamento el estado de guerra interna y la suspensión de las garantías (...) firmaron su acta de defunción.⁵¹

Ciertamente, la espiral autoritaria otorgó un manto de legitimación y robusteció la credibilidad de la opción tupamara. Pero esta fue sólo una de las dimensiones del fenómeno

EL PASADO DEL PRESENTE

guerrillero uruguayo. La otra, como veremos más adelante, tuvo que ver con una decisión estratégica que trascendía la lógica del partisano y que se manifestó, inclusive, en la declaración de adhesión al Frente Amplio efectuada por los tupamaros en 1970. En un didáctico esquema de preguntas y respuestas, se expresaba:

¿Qué ocurrirá cuando el pueblo se proponga tomar el poder y no influir en el poder? ¿Acaso esta oligarquía que por defender sus dividendos, encarcela, tortura y mata, cederá sus tierras y sus bancos sin dar batalla? No. Los oprimidos conquistarán el poder sólo a través de la lucha armada.⁵²

En el caso brasileño, la lógica del partisano cuenta a su favor con un hecho histórico: todos los grupos guerrilleros surgieron y se constituyeron en la lucha contra la dictadura de Castelo Branco y sus sucesores. A diferencia de Uruguay, las elites carecían de una tradición liberal democrática fuerte y el sistema de partidos distaba de haber sido una dimensión central en la vida política. Prueba de ello fue su maleabilidad, reflejada en la capacidad manipuladora de los militares, quienes inventaron un sistema de dos partidos y promovieron la existencia de un parlamento funcional a sus intereses. Al compás de una fuerte influencia norteamericana, apuntaron a la constitución de un «Estado de Seguridad Nacional» y en función de ese imperativo desarrollaron la «Operación Limpieza». Ésta suponía la investigación de todos los funcionarios civiles y militares —incluyendo los integrantes del poder judicial— a efectos de identificar posibles subversivos o infiltrados. A tenor de estas circunstancias, la guerrilla encontraba terreno abonado para su legitimación, aunque su suerte en el terreno militar fuese escasa.

En Chile, la lógica del partisano carece de plausibilidad para explicar el surgimiento del MIR. Estabilidad política, fuerzas armadas de tradición institucionalista y papel central de los partidos políticos, eran factores que operaban

en detrimento de la constitución de organizaciones armadas. Como contrapartida, el MIR nunca tuvo las características marcadamente militaristas de quienes consideraba sus organizaciones hermanas de Argentina, Brasil y Uruguay. Ni el foco urbano ni el foco rural, formaron parte de su estrategia política. Sus construcciones discursivas amenazantes simulaban una fuerza que no se correspondía con su anclaje organizacional, aunque alimentase a la postre, todos los fantasmas de la derecha.⁵³

Se puede argumentar que durante la década de los 60 los gobiernos democristianos estimularon el entrenamiento represivo: el ejército formó las compañías de Boinas Negras, y Carabineros creó el denominado «Grupo Móvil». También se puede aducir que el MIR construyó los GPM (Grupos Político Militares), quienes realizaron algunas acciones armadas contra bancos. Pero estas cuestiones no eran suficientes para redefinir la columna vertebral —para utilizar una expresión grata a Manuel Antonio Garretón— de la sociedad chilena: el sistema de partidos. En rigor, desde 1932 hasta el golpe de Pinochet, no hubo ni dictadores ni partisanos.

Segunda hipótesis: la primacía de las estrategias ideológicas

Las estrategias suponen un alto grado de interrelación entre conciencia de la acción, medios de la acción y fines mediatos. El concepto de *estrategias ideológicas* alude a su imbricación con teorías de carácter general, y por lo tanto, provistas de un alto potencial universalizador. En contraste con el razonamiento planteado en la primera hipótesis, la explicación no se centra en el nivel político-institucional sino en el plano de las concepciones fundamentales que inspiraron a las distintas organizaciones. Desde este punto de vista se puede sostener que la lucha armada estaba inscrita en el propio modelo originario sobre el que se construyeron las organizaciones político militares del cono sur de América Latina.

En esta hipótesis, el carácter ideológico de las estrategias esta determinado por construcciones teóricas derivadas del orden internacional. Si los guerrilleros de Mao Tse-Tung parecían haber demostrado que el imperialismo era «un tigre de papel», si el legendario general Von Nguyen Giap lo había corroborado en Dien Bien Phu y en la resistencia al napalm, y los doce hombres del *Granma* a pocos kilómetros del corazón del imperio, sólo bastaba mirar alrededor, comprar el periódico, para acceder a los ejemplos probados y exitosos. Esos referentes marcaban el camino e indicaban estrategias que eran discutidas por la militancia. Los partidarios de la vía insurreccional soñaban con mutar las puebladas provinciales en insurrecciones generales. Los entusiastas de la «guerra prolongada» polemizaban acerca de sus herramientas: partido, ejército popular y frente de liberación.

A tenor de lo expuesto, se puede argumentar que para actores de las características mencionadas todo espacio democrático era instrumental, aun el obtenido en las urnas, en 1970 en Chile, en 1971 en Uruguay y en 1973 en Argentina. Este punto de vista contiene una dosis importante de verdad pero puede derivar en un enfoque reduccionista. Si se absolutiza, impide ver los matices y reduce la sinfonía rebelde de los 70 a la música marcial.

En clave comparativa, el más bajo impacto de las estrategias violentas —de origen vietnamita, cubana o china— tuvo lugar en Chile. En contraste con el entusiasmo guerrillero de sus vecinos, aun las organizaciones más radicalizadas hicieron primar la política por sobre las actividades de orden militar. Es posible que este fenómeno se correlacionase con la fortaleza histórica de las mediaciones partidarias, el prestigio institucionalista de sus militares, y la influencia ideológica del Partido Comunista. La principal renovación introducida por la izquierda revolucionaria no se tradujo en un planteo foquista sino que residió en la crítica a la teoría etapista de la revolución. En consonancia con

los planteamientos de versiones muy difundidas de la «teoría de la dependencia» —como las de Ruy Mauro Marini o Theotonio Dos Santos— no habría una separación nítida entre dos etapas —revolución democrática y revolución socialista— sino que la segunda realizaría *per se* las tareas que la primera fue incapaz de realizar. En América Latina, decía Mauro Marini, «el avance incontenible de las masas se orienta inevitablemente hacia la sustitución del actual sistema de producción por otro (...) el sistema socialista».⁵⁴ Con la didáctica y estremecedora sencillez de los grandes líderes, Ernesto Guevara había condensado la teoría en una sentencia: «Revolución socialista o caricatura del revolución».

En el plano de la dinámica política chilena, el principio precedente se expresó en una divergencia básica de orientaciones en el seno de la izquierda. Mientras Salvador Allende y los sectores moderados de la Unidad Popular sostenían la necesidad de «consolidar para avanzar», las agrupaciones más radicalizadas sostuvieron dogmáticamente la apuesta por «avanzar sin transar». En el primer caso, la propuesta se orientaba al compromiso y, por lo tanto, a una dinámica interpartidaria centrípeta; en el segundo, la intención era caminar hacia un enfrentamiento frontal. Esta última no descansaba sobre la confianza en recursos organizativos superiores, sino, más bien, en una representación de la temporalidad en virtud de la cual el reloj de la historia —o la «rueda de la historia» para utilizar una expresión epocal— sólo se podía acelerar en un sentido favorable a los explotados y a los movimientos revolucionarios.

En Uruguay, las tradiciones cívicas eran fuertes, la propensión al compromiso un signo de virtud y su linaje institucional se preciaba de ser la democracia más antigua de América del Sur. El propio Ernesto Che Guevara, admitía en 1961 las peculiaridades uruguayas. Con motivo de su presencia en Montevideo —para asistir a una reunión del CIES (Consejo Interamericano Económico Social)— afirmaba:

Ustedes tienen algo que hay que cuidar, que es, precisamente, la posibilidad de expresar sus ideas; la posibilidad de avanzar por cauces democráticos hasta donde se pueda ir (...) sin derramar sangre, sin que se produzca nada de los que se produjo en Cuba, que es, cuando empieza el primer disparo, nunca se sabe cuándo será el último.⁵⁵

Sin embargo, la lógica de las estrategias ideológicas tuvo en Uruguay un fuerte impacto, particularmente en el campo cultural y político. La intelectualidad uruguaya, anclada en el universo ideológico del «tercerismo» —un conjunto de ideas y valores de cuño reformista, humanista y anti-imperialista cuyos sonos recordaban los ideales de la Reforma Universitaria de 1918— exhibió un alto grado de permeabilidad a la influencia cubana. Entre la Segunda Declaración de La Habana (1962) y las reuniones de la Tricontinental entre 1966-68, numerosas y reconocidas figuras de la cultura uruguaya transitaron el camino que conducía del intelectual comprometido con la realidad al intelectual armado. El semanario *Marcha*, el escritor Mario Benedetti y el cantor Daniel Viglietti, fueron ejemplos ilustrativos de los cambios operados en un campo cultural que no sólo había tomado distancia y miraba con desdén la política tradicional de blancos y colorados, sino que aspiraba a templar su espíritu en el de una epopeya revolucionaria de carácter continental. De acuerdo con Hebert Gatto, este soporte cultural intelectual fue un insumo básico para la construcción tupamara. El otro provenía, a mi juicio, del estancamiento electoral de la izquierda tradicional. Entre 1950 y 1966, la suma de los votos del Partido Comunista y el Socialista apenas se había elevado del 4,4% al 6,8% de los sufragios.

Con ese telón de fondo, los tupamaros ensayaron un doble movimiento. Por una parte, recrearon la teoría del foco, adaptándola a las condiciones geográficas de su país. A falta de selvas y montañas, sustituyeron la base territorial por un foco urbano de localización difusa.



Por otra, a falta de conciencia y condiciones subjetivas —como lo reconocía el documento n.º 1 de la organización en 1967— estimaron que la propia lucha armada contribuiría a crearlas.⁵⁶ Este núcleo conceptual permite albergar la sospecha que su adhesión al Frente Amplio en 1970 tuvo un carácter principalmente instrumental. Paradójicamente, el consejo del *Che a los uruguayos*, expresado casi 10 años antes, quedaba sepultado en un manto de olvido.

En contraste con Uruguay, los grupos armados brasileños se constituyeron tras el ocaso de la experiencia populista reformista de Goulart, en oposición a un golpe militar amparado por los EE.UU. La sincronía temporal que reúne dictadura con influencias ideológicas externas —de origen maoísta y guevarista— torna difícil discernir la incidencia de la lógica del partisano de la de las estrategias ideológicas. Por cierto, los indicios de éstas son múltiples: aparecen con claridad en los postulados de la maoísta guerrilla rural de Araguaia (impulsada por el PC do Brasil), en los del guevarista Movimiento Revolucionario 8 de Octubre, y, particularmente, en uno de los textos más famosos de la época: el *Minimanual del guerrillero urbano* de Carlos Marighella (1969). Dos años antes, había viajado a Cuba para participar de la primera conferencia de OLAS (Organización Latinoamericana de Solidaridad). Como sus pares uruguayos, y a contragusto de los planteamientos clásicos de Guevara y Debray, redefinió la teoría del foco para hacer hincapié en la lucha armada urbana.

Empero, el fracaso militar de los guerrilleros brasileños produjo un fenómeno poco frecuente, a saber, la reconversión de muchos de los sobrevivientes –aun en plena dictadura– y su apuesta por construcciones políticas que combinaban la lucha social con la electoral. Tres ejemplos son ilustrativos al respecto: 1) Los ex guerrilleros del Movimiento de Emancipación del Proletariado integrados al PT; 2) La figura de José Genoino, sobreviviente de la guerrilla rural que llegó a ser presidente del PT; 3) La experiencia guerrillera de 1967 en la Serra do Caparaó (entre Mina Gerais y Espirito Santo), vinculada a Leonel Brizola fue abandonada tras comprobarse su inviabilidad práctica. Así, en 1981 Brizola fundó el PDT (Partido Democrático Trabalhista).⁵⁷ En contraste con los Montoneros argentinos, obstinados en prácticas militaristas en la plenitud de su hecatombe, los guerrilleros de Brasil demostraron poseer una mayor ductilidad para asumir las lecciones de su derrota.

En Argentina, las influencias de las estrategias ideológicas fueron relevantes tanto en la izquierda revolucionaria como en el peronismo radicalizado. Su construcción y viabilidad histórica se legitimó, desde un principio, a partir de una confrontación, bien con la vía pacífica impulsada por el Partido Comunista, bien con las prácticas de negociación a la que eran proclives sectores del peronismo (la «capa blanda» del peronismo que tanto despreciaba John W. Cooke). En ambos casos, el rechazo a la violencia era equiparado con diversas formas de «integración» al sistema.

No obstante, cabe señalar la existencia de intentos, a la postre frustrados, de construcción de alternativas superadoras de carácter pacífico aun en los momentos más duros y represivos del gobierno de María Estela Martínez. En este sentido, cabe recordar dos ensayos: 1) el Partido Peronista Auténtico (resultado de una alianza entre Montoneros y peronistas históricos, como Andrés Framini y Óscar Bidegain) que en la primavera de 1975

se perfilaba como la tercera fuerza electoral del país. En abril de ese año, el Partido Auténtico se había estrenado electoralmente en la provincia de Misiones, con candidatos propios para legisladores y en alianza con el partido provincial «Tercera Posición» en el comicio a gobernador. 2) El Frente Antimperialista y por el Socialismo –FAS– que nucleó en 1974-75 al PRT y amplios sectores de la izquierda radicalizada (desde Silvio Frondizi a Agustín Tosco). Cabe recordar que el FAS tuvo un crecimiento meteórico, movilizó miles de militantes en todo el país y en su seno se planteó como posible fórmula presidencial las candidaturas de los dirigentes obreros Agustín Tosco-Armando Jaime.

Tanto el FAS como el Partido Peronista Auténtico fueron estimulados por los militantes más «políticos», menos «fierros» de las distintas organizaciones, así como por sectores de la izquierda radicalizada no armada. Su fracaso no fue sino el revés de la primacía de la lógica militarista, en virtud de la cual el trabajo político de masas no era sino un complemento o una apoyatura de la actividad armada. Empero, el triunfo del militarismo no puede derivarse linealmente de sus estrategias. No existe correlación lineal ni eran sólo violentos porque conceptualmente debían serlo. Porque, ¿en qué medida el comportamiento y las estrategias del gobierno y las elites políticas y militares no alentaban la lógica de la guerra? Y a modo de hipótesis contrafactual, ¿cómo imaginar el desarrollo del FAS y el Partido Auténtico en un escenario donde no existiesen grupos parapoliciales y paramilitares?

Tercera hipótesis: la lógica militarista de las elites

Esta hipótesis podría ser bautizada también con otros nombres: Operación Ezeiza en Argentina, Operación Schneider en Chile, Operación Cazatupamaros en Uruguay, Escuadrones de la muerte en Brasil. En todos

los casos, se hace referencia a una forma de hacer política que tuvo también su anclaje en el interior de las clases dominantes, en sus elites políticas, empresariales y/o gubernamentales. Me estoy refiriendo a su propensión al *militarismo*, entendida como tendencia a resolver los problemas políticos por medio de la violencia organizada. Se trata de un tipo de violencia que se traduce en la acción ilegal de grupos parapoliciales y paramilitares, cuyo itinerario comienza erosionando la dimensión republicana del sistema político y termina finalmente su trayectoria liquidando el régimen democrático. En los años 60 y 70 del siglo XX sudamericano, la doctrina de la guerra contra el enemigo interno —analizada precedentemente— operó como un marco legitimatorio alternativo al de la legitimidad republicana. De esta manera, suministró argumentos que permitieron justificar la implementación de prácticas terroristas —ataques contra dirigentes políticos o sindicales, artistas, abogados o intelectuales, así como detenciones ilegales, asesinatos y torturas— aún antes de los golpes militares que institucionalizaron el terrorismo de Estado.

Entre 1973-76 Argentina experimentó una singular combinación de guerra y transición democrática. Intentar dar cuenta de ese fenómeno impone una pregunta: en ese período, el militarismo ¿fue patrimonio de las organizaciones armadas o hubo también un «militarismo gubernamental», resultado de la tibieza de fe de las elites en la virtudes de la democracia?

Cuando los manifestantes cantaban «Isabel habla de paz y nos manda las 3 A», o «Se va acabar, se va acabar esa costumbre de matar», ponían el dedo en la llaga: el doble discurso que se había impuesto desde la masacre de Ezeiza en junio de 1973. El arribo de Perón al país vino acompañado de encendidas apelaciones a la paz, la democracia y la unidad nacional. Empero, al día siguiente de la masacre en lugar de exigir una investigación para castigar a los responsables, convalidó los hechos sostenien-

do que los peronistas son lo que las 20 verdades justicialistas dicen que son. Ni el coronel. Osinde (flamante secretario de Deportes y Turismo) ni López Rega fueron cuestionados. A partir de Ezeiza estaba claro que la impunidad estaba asegurada para quienes desde la cúpula del Estado se propusiesen eliminar al adversario. La violencia era, pues, un recurso lícito. No en vano José Ignacio Rucci inauguraba, en esa misma época, un polígono de tiro en la CGT.⁵⁸ Como ha señalado agudamente María Matilde Ollier: «Desde que el peronismo se hace cargo del gobierno, hay una suerte de reconocimiento discursivo de la democracia y de la necesidad de terminar con los enfrentamientos (sintetizado en el reemplazo de la vieja consigna “para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”, por la consigna «para un argentino no hay nada mejor que otro argentino»). Pero en la práctica, esto no se lleva a cabo. El doble discurso de la política argentina alcanza su máxima expresión».⁵⁹

La eliminación del disenso por intermedio de la fuerza fue legitimada por Perón a través de metáforas organicistas. En febrero de 1974, el presidente Perón calificó a Córdoba —gobernada por el peronismo progresista— como un «foco de infección», y acusó a los infiltrados de «brotes enfermos» que venían a perturbar el cuerpo sano del verdadero justicialismo.⁶⁰ Ese mismo mes, en un hecho sin precedentes en la historia constitucional argentina, el jefe de policía —apoyado por la ultraderecha peronista— destituyó al gobernador. En lugar de reponer en su cargo al gobernador electo por los cordobeses en marzo de 1973, Perón convalidó la acción policial e intervino la provincia. Tras la muerte de Perón, el vicegobernador depuesto Atilio López —dirigente histórico de la Unión Tranviaria Automotor— fue fusilado por las 3 A.

Si bien la «Memoria de Estado» es reacia a registrarlo, es imperativo señalar que el terrorismo financiado y organizado desde las esferas estatales fue uno de los rasgos singulares

que caracterizó al gobierno de María Estela Martínez. La «doctrina Ezeiza» se convirtió en hegemónica y promovió desde la cima del Estado la lógica de la guerra. De este modo, la inconsecuencia democrática de las elites autorizó la inconsecuencia democrática de la lógica del partisano y facilitó la primacía de las estrategias ideológicas.

Del otro lado del Río de la Plata, las elites políticas tampoco se mantuvieron impolutas. Dos años antes del golpe de Estado, el gobierno de Pacheco Areco, a través de su ministro del Interior, Danilo Sena, y de los secretarios de Defensa, dio rienda suelta a los grupos parapoliciales y paramilitares. A partir de 1971, los «cazakupamaros» y «escuadrones de la muerte» multiplicaron sus atentados y asesinatos contra personalidades de izquierda y militantes políticos. El 27 de septiembre de ese año, el embajador norteamericano en Uruguay, Charles Adair, se entrevistó con el ministro Danilo Sena a efectos de solicitarle una mayor dosis de mesura, dado que el accionar de esos grupos podía provocar efectos adversos en el Congreso de los EE.UU. Según relata la documentación diplomática norteamericana el diálogo se planteó en estos términos:

El ministro dijo que comprendía mi posición —informó Adair— pero señaló que Uruguay, en esos momentos, estaba en guerra contra el terrorismo y que en esa lucha era necesario recurrir a todo tipo de acciones.⁶¹

Como puede apreciarse, el financiamiento estatal de actividades terroristas comenzó, tanto en Argentina como en Uruguay, antes de los golpes militares, poniéndose al descubierto la dudosa fe democrática y republicana de una parte importante de sus respectivas dirigencias políticas.

Varios años antes en Brasil, antes del golpe militar que derrocó a Goulart, comenzaron a proliferar los escuadrones de la muerte. Entre ellos, el Grupo de Acción Patriótica dirigido por el almirante Heck, las Milicias Anticomu-

nistas y la Patrulla Auxiliar Brasileña. En algunos casos, estos grupos estaban financiados a partir de las gobernaciones estaduais. En este aspecto, la historia brasileña anticipó a la de sus vecinos. Instaurada la dictadura, grupos de índole similar, como el Comando de Caza Comunistas liderado por Otávio Moreira, contaron con el beneplácito gubernamental.⁶²

En Chile, la vía pacífica al socialismo comenzó ensangrentada con el asesinato del general René Schneider, dos días antes de la asunción presidencial de Salvador Allende. La muerte de este militar de vocación constitucionalista —a la sazón, comandante en jefe del Ejército— tenía por objeto —en combinación con otras acciones de sabotaje— provocar un clima de caos que impidiese el acceso de Allende a la Casa de la Moneda. La operación Schneider instigada por la organización ultraderechista *Patria y Libertad* distaba de ser un dato anecdótico. Anticipaba la tendencia de círculos militares, empresariales y del propio gobierno norteamericano, orientada a liquidar la experiencia de la Unidad Popular por medio de la violencia. En 1973, la acción del terrorismo de derecha fue ostensible. El 26 de julio de ese año fue asesinado el comandante Arturo Araya, edecán naval y amigo del Presidente. El recurso al crimen se combinaba con la ofensiva desestabilizadora en la Cámara de Diputados: el 22 de agosto democristianos y derechistas aprobaron una resolución declarando «ilegal» al gobierno electo por la voluntad popular.⁶³

A tenor de lo expuesto, es posible afirmar que tanto en los países con una fuerte impronta populista —como Argentina y Brasil— como en aquéllos en que la matriz partidaria era central —Chile y Uruguay—, las elites gubernamentales, empresariales, políticas y militares no estuvieron exentas de la tentación de apelar a métodos terroristas. Armadas de un doble discurso, pero provistas de una lógica militarista, exigían a sus adversarios y enemigos, la observancia de una legalidad que ellas mismas eran incapaces de respetar. Y más aún, echaban por tierra

precozmente la dimensión republicana de la democracia y el propio Estado de Derecho.

Cuarta hipótesis: El espíritu de cruzada

A diferencia de los enfoques anteriores, el eje no se sitúa ni en lo político-institucional ni en lo conceptual-ideológico. Su perspectiva remite, más bien, al peso de una dimensión religiosa camuflada en los valores y prácticas seculares de las organizaciones revolucionarias. Desde este ángulo de preocupaciones, se destaca el impacto de la confluencia entre marxismo, nacionalismo y catolicismo. Este habría suministrado —particularmente a través de sacerdotes (los únicos intelectuales que tienen audiencia de masas, al decir de Carlos Altamirano)—⁶⁴ una mirada integrista tanto de la realidad latinoamericana como de las propias organizaciones cuya singularidad residía en un potencial disruptivo que se extendía desde las favelas y villas miserias a los barrios acomodados de la clase media. Esta mirada suponía no sólo una visión teleológica, sino también formas de hacer política uniformizadoras y disciplinadoras del campo popular. En esta interpretación —que en el caso argentino se aplica fundamentalmente a Montoneros— la lucha por un nuevo Edén se asocia a la violencia redentora. Como en el *Apocalipsis* de Juan o en el *Libro de Daniel*, el combate se orienta contra el último poder mundano. De modo analógico, el papel de los santos es asimilado al de los cuadros dirigentes, con capacidad para imponer sanciones, inclusive en el terreno de la vida privada. Cabe recordar que el artículo 16 del *Código Montonero* penaba con degradación y arresto la infidelidad conyugal. En relación a este tema, el ex presidente argentino, general Lanusse, recordaba en sus *Memorias* que «la raíz ideológica de los primeros grupos terroristas (...) fue desconcertante», dado que muchos de ellos provenían del «nacionalismo tradicional» o habían pasado por los liceos militares. Los autores del asesinato de Aramburu

en 1970, habrían sido «católicos de comunión y misas regulares».⁶⁵

En contraste con los Montoneros, gran parte del elenco inicial del PRT-ERP provenía de familias vinculadas a la Unión Cívica Radical, entre ellos, Mario Roberto Santucho (cuyo padre había sido electo diputado de la UCR en Santiago del Estero en los años 30), Benito Urteaga (hijo de un popular caudillo radical de San Nicolás), Luis Pujals y Enrique Gorriarán Merlo. No se trata de un dato menor: cabe recordar que en el universo cultural del radicalismo, la lucha armada y la revolución estaban legitimadas en períodos dictatoriales o de democracia fraudulenta. Si a este factor se añade la veta trotskista, es posible afirmar que la hipótesis del espíritu de cruzada resulta poco apropiada para explicar su práctica política.

En Uruguay —país con una cultura política más secularizada y laica que Argentina— no es posible afirmar que la influencia católica fuese relevante. De acuerdo a Hebert Gatto —autor de una enjundiosa reflexión crítica sobre los tupamaros—, «la religión no tuvo ninguna presencia clara en los documentos de la organización, ni incidió en las definiciones propiamente políticas o ideológicas».⁶⁶

En el caso brasileño, al contrario de lo que sucederá años después al formarse el PT, la influencia católica distó de ser relevante en la conformación de los primeros grupos armados, escindidos del pro soviético Partido Comunista, y/o volcados al maoísmo, el guevarismo y el trotskismo. Si bien es cierto que la radicalización de la JUC (Juventud Universitaria Católica) tuvo como corolario la formación del grupo Acción Popular que engrosó luego las filas del maoísmo; también lo es que la confluencia entre «teología de la liberación» y lucha armada fue más débil que en Argentina.⁶⁷ El enorme prestigio de la figura de Helder Cámara —obispo de Olinda y Recife— no fue capitalizado por la izquierda armada. No fue casual. Su oposición a las opciones violentas fue manifiesta y tuvo fundamentos tanto teo-

lógicos como políticos. En una entrevista concedida a Oriana Fallaci, explicó con lucidez:

Los jóvenes que en Brasil reaccionan a la violencia por la violencia son idealistas que admiro. Tristemente, su violencia no lleva a nada, y debo agregar esto: si deciden jugar con las armas, los opresores los aplastan. Querer afrontarlos en su propio terreno es pura locura.⁶⁸

El caso de Chile ofrece singularidades propias. Allí, la interacción entre cristianismo y marxismo tuvo como corolario dos rupturas del Partido Demócrata Cristiano. La primera, en mayo de 1969, dio lugar al MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria). La segunda, en julio de 1971, tuvo como consecuencia la constitución de Izquierda Cristiana (IC). Ambas tuvieron un carácter radicalizado y fueron compañeras de ruta de Salvador Allende o del propio MIR. En 1973, el MAPU se dividió en dos sectores, uno más moderado que adoptó el nombre de MAPU Obrero y Campesino y otro radicalizado —dirigido por Oscar Garretón— que conservó la denominación original. Tras el golpe de Pinochet, un nuevo grupo —conocido como MAPU Lautaro— desarrolló actividades militares contra la dictadura. Como puede apreciarse —en contraste con sus pares de Argentina, Brasil y Uruguay— los revolucionarios católicos no se diseminaron en organizaciones laicas sino que sostuvieron o intentaron sostener una identidad propia.

En rigor, los rasgos que se han mencionado —desde la pulsión mesiánica hasta el fetichismo de la violencia— estuvieron presentes en la militancia de los 70. La cultura política de la época potenciaba la épica del coraje y el sacrificio en poesías, canciones y películas. Porque «nuestra libertad —decían los jóvenes parafraseando al Che— tiene color de sangre». Sin embargo, conviene relativizar la capacidad explicativa de esta dimensión cultural. Porque —como ha señalado con acierto Norman Cohn— esas características son comunes a gran parte de los movimientos revoluciona-

rios: después de 1917 «se ha producido una constante repetición, y escala incluso superior, de aquel proceso socio-psicológico que en un determinado momento unió a los sacerdotes taboritas o a Thomas Müntzer con los pobres más desorientados y desesperados en las fantasías de una lucha final y exterminadora contra los poderosos y de un mundo perfecto del que desaparecería para siempre el interés egoísta».⁶⁹ Las organizaciones revolucionarias del siglo XX compartieron muchas de las características de las sectas y movimientos milenaristas. Fueron totales (buscaron una sociedad y un hombre nuevo), inminentes (no en vano su metáfora más querida era la inexorable «rueda de la historia»), terrenales (la lucha por la liberación es el tránsito hacia el paraíso terrenal) y escatológicas (tuvieron una suerte de doctrina de los tiempos finales). Esta dimensión contribuye a explicar la intensidad política, a saber, la participación política como proyecto de vida. Pero es sólo uno de los aspectos y su incidencia fue desigual tanto en el nivel organizacional como en el social y geográfico. Ayuda a entender ciertos aspectos de la subjetividad militante, pero dista de ser la variable independiente que permite explicar la violencia organizada y el desarrollo de las organizaciones político militares.⁷⁰ Asimismo, su influencia —como hemos visto— fue muy desigual según países, regiones dentro de cada país, y organizaciones de que se trate.

Quinta hipótesis. La lógica del Golem

El imperio del Golem es el resultado de la coexistencia de dos lógicas en tensión que habitaron el interior de los mismas organizaciones revolucionarias. Una estaba marcada por el espíritu romántico y enlazaba con un clima de revuelta moral que se extendía por las principales ciudades y universidades del mundo. La otra estaba definida por la racionalidad instrumental de la guerra. La primera conducía a liberar las energías creativas en lo

EL PASADO DEL PRESENTE

artístico, en lo cultural y en lo político. La segunda subordinaba esa creatividad a un cálculo costo-beneficio evaluado en términos militares. El imperio del Golem es el producto del triunfo de la segunda sobre la primera.

¿Cómo fue posible la coexistencia —en el interior de las organizaciones pero también de cada individuo— de estas lógicas en tensión? En primer lugar, habría que aclarar que su ecosistema fue, en términos genéricos, la «juventud». Juan Carlos Torre ha señalado al respecto que en esos años 60/70 la juventud dejó de ser una categoría biológica para recibir una identidad diferenciada en los medios de comunicación. La emergencia de la juventud como «sujeto colectivo» fue, a su juicio, el síntoma más significativo de la modernización cultural que atravesaba la época.⁷¹ La juventud de los individuos que participaban de las organizaciones —entre 18 y 24 años, aproximadamente— era correlativa de una inmadurez política que permitía albergar la ilusión del Robin Hood: hacer la guerra provocando el mínimo daño posible, es decir, sólo el estrictamente necesario. En consonancia con la frase del mítico Sandino, no se consideraban militares sino civiles armados, jóvenes rebeldes que empuñaban las armas contra la injusticia.

No es casual que la primera carta pública de los tupamaros —en diciembre de 1967— haya sido dirigida a dos modestos agentes de policía con los que se habían enfrentado. El tono de la misma ponía al desnudo el dilema moral de los militantes armados:

Ustedes saben que la verdad es que nos confundieron con los ladrones de joyas. Que a vuestro pedido el compañero (...) mostró el documento de identidad y les dio las explicaciones solicitadas, desarmado y de buenas maneras. Que aun así, ustedes lo detuvieron revólver en mano (...). La verdad es que el compañero que entonces salió de la cabaña, arma en mano, antes de tirar les pidió que se quedaran quietos, pero ustedes intentaron quitarle el arma y dispararon sobre él hiriéndolo de consideración (herida que nadie

menciona, a pesar de que el agente Bentancor la vio sin lugar a dudas). La verdad es que cuando dicho agente cayó herido y pidió por su vida, la misma fue respetada, siendo además, atendido, revisado y tranquilizado por otro compañero con respecto a la magnitud de la herida. Todo esto ustedes lo conocen bien (...) tratamos por todos los medios de encontrar una salida antes de tirar.⁷²

En esta virginal y apenas sangrienta —porque no hubo muertos— inauguración de los Tupamaros, la marca de juventud era ostensible. En la misma carta, señalaban casi con candor:

Para nosotros ha sonado definitivamente la hora de la rebeldía y ha terminado la hora de la paciencia.

Y añadían con un aire que evocaba los sonos del tercerismo uruguayo, y más atrás, del reformismo universitario de la primera mitad del siglo XX:

No seríamos dignos uruguayos ni dignos americanos, ni dignos de nosotros mismos, si no escucháramos el dictado de la conciencia que nos llama día a día a la lucha.⁷³

Como puede apreciarse, la revolución era concebida como un imperativo moral.

En consonancia con esta sensibilidad, los tupamaros desarrollaron durante los primeros años un estilo marcado por el ingenio, la elegancia y el refinamiento. Parecían tener más empeño en mostrar su ingenio y su destreza que su fuerza. Quizá no fuese ajena a estas circunstancias la composición social de su primera dirección: estudiantes, artistas plásticos e ingenieros.⁷⁴ Las simpatías generadas en la población por ese estilo singular, generó un nuevo personaje, bautizado en la época con el nombre de «bocamaros». Por cierto, ello no alteraba en lo sustancial, el dominio de los partidos tradicionales en el terreno electoral.

Tras la toma de la localidad de Pando en octubre de 1969 y, particularmente, luego del asesinato de Dan Mitrión —en un marco de



acoso de la represión legal e ilegal— ese estilo de accionar fue arrasado por la lógica de la guerra. Tiempo después, los dirigentes «históricos» de la organización culparon a los dirigentes de la segunda generación de militaristas y aparatistas, responsabilizándolos de la derrota. En rigor, el militarismo y el aparatismo fue el corolario lógico de la resolución de una tensión que estaba inscrita en sus orígenes.

En el caso argentino, el estudio de dos secuestros en perspectiva comparada permite desnudar la subterránea y tensa coexistencia de dos tendencias distintas en el seno de las organizaciones armadas. El 24 de marzo de 1970 tuvo lugar el primer secuestro político: las Fuerzas Argentinas de Liberación (FAL) —agrupación autodefinida como un partido político militar de cuadros marxistas leninistas— secuestró al cónsul paraguayo Waldemar Sánchez. En canje por su libertad, exigió la liberación de sus compañeros presos, Alejandro Baldú y Carlos Della Nave. Ante la indiferencia del dictador paraguayo Stroessner y la actitud intransigente del gobierno argentino —no parecía importarles mucho el destino de Sánchez— las FAL tenían dos opciones: ejecutar al cónsul haciendo honor a sus advertencias o dejarlo en libertad. La decisión fue devolverle la libertad y regalarle una muñeca para que la

entregara como obsequio a su pequeña hija.⁷⁵

El 29 de mayo de ese mismo año, en cambio, un segundo secuestro político, el del general Aramburu —organizado por Montoneros— tuvo un desenlace opuesto: una ejecución calculada, racionalizada y fría. Pese a tratarse de personajes muy distintos, creo que la actitud de los secuestradores en ambos casos revela dos tendencias que estuvieron presentes de modo difuso pero conflictivo en el conjunto de las organizaciones que desarrollaron estrategias de lucha armada. La primera enlazaba con el clima de transgresión y revuelta moral que había asomado sus filones en los jóvenes de París, Praga o ciudad de México. Suponía, paradójicamente, una aceptación ideológica de la violencia como partera de una nueva sociedad y, al mismo tiempo, cierta resistencia a la práctica de acciones que pudiesen provocar muertes: al estilo de Robin Hood, el daño ocasionado nunca debía ser mayor del estrictamente necesario, no había que matar salvo que peligrase la propia vida y la tortura estaba absolutamente prohibida (fuera del imaginario revolucionario). El hombre nuevo debía ser la antítesis del hombre mediocre retratado por José Ingenieros, y por consiguiente, toda injusticia —aun la más pequeña— le estaba vedada. Las reglas no escritas de este código rebelde y contestatario, entraban en colisión con el ejercicio personal de la violencia en un esquema de mando obediencia como el que exigían los aparatos militares de las organizaciones. Peor aún. Una vez creados los aparatos militares, estos adquirieron progresivamente una identidad propia. El secuestro de Aramburu, fue en este sentido, toda una promesa que anticipaba el predominio de la lógica de aparato.

Muchos son los motivos que se pueden esgrimir para explicar el triunfo del militarismo en el interior de las organizaciones de la izquierda y el peronismo revolucionario. Empero, uno de ellos reviste capital importancia. Me estoy refiriendo a la *lógica del Golem*: como Loew, aquel rabino de Praga que según las le-

yendas de la Cábala creó un hombre artificial para que le sirviese, las organizaciones crearon aparatos que adquirieron vida propia. Desde su constitución comenzaron a generar una red de necesidades, funciones y jerarquías cuya continuidad y legitimidad requería alimentar la lógica de la guerra. De otro modo, ¿cómo sería posible, por ejemplo, que un experto en asaltos a comisarías mantuviese un estatus más alto que la mayoría de los cuadros políticos? Por eso, a diferencia del autómata de Praga, la lógica expansiva de los aparatos no podía ser anulada por la racionalidad política ni por palabras mágicas como las que Loew situaba entre los dientes de su creación.⁷⁶

Desde ángulo de razonamiento, se puede añadir –recordando las clásicas lecciones de Robert Michels– que las fuentes del poder organizativo hunden sus raíces en una determinada división del trabajo en el interior de cada uno de los partidos. Cuando esa división del trabajo supone la delimitación de funciones militares, implica también una delegación de poder efectivo en quienes están especializados en el desarrollo de esas tareas. Más aún, cuando la matriz militar constituye una variable relevante en la construcción del modelo organizativo originario, la propia legitimidad de las organizaciones tenderá a correlacionarse con la reproducción y fortaleza del aparato militar.

Nace, así, el tabú de matar o debilitar al Golem.

Cabe añadir, finalmente, que en Brasil, la rápida derrota de la guerrilla –los militares brasileños y sus asesores norteamericanos la estaban esperando desde 1964 desde su centro de adiestramiento en la selva amazónica– mostró igual que en los casos anteriores, que el Golem tenía los pies de barro. La constitución del PT en 1979 y la apuesta por ese partido de las comunidades eclesiales de base, constituyeron un test que puso a prueba –exitosamente– la capacidad de aprendizaje de los sectores radicalizados. En el caso de

Chile, no se puede hablar de un fenómeno de Golem, porque el MIR nunca llegó a constituir un aparato militar de relevancia y, menos, un «ejército». La fuerza popular de la teoría del tránsito institucional al socialismo operaba en detrimento de un intento de esas características. Más allá de su retórica amenazante, el MIR nunca concretó en los hechos el pasaje de la política institucional a la política de la guerra. Cuando se planteó hacerlo, era demasiado tarde: Pinochet estaba en ciernes. En Chile, el derrotado no fue el imperio del Golem sino el imperio de las ilusiones.

Epílogo

Las cinco lógicas políticas expresadas precedentemente tuvieron un rasgo común: fueron lógicas de la radicalización. Todas ellas conducían, *per se*, a agudizar las contradicciones políticas y sociales. Dicho en otras palabras, operaban a favor de una dinámica de polarización social. La incertidumbre generada por esas formas de hacer política no era un problema que traumatizase a sus protagonistas. Si la izquierda contabilizaba a su favor una representación de la temporalidad que siempre jugaba a su favor –la rueda de la historia–, la derecha política y militar había unificado criterios y líneas de acción en el plano transnacional. El general Onganía lo señaló tempranamente en Brasil el 31 de agosto de 1964: «Para los ejércitos latinoamericanos no deben existir fronteras políticas sino ideológicas. Debemos crear una frontera ideológica (...)». En aquella oportunidad, los militares brasileños corroborarían que las fronteras físicas eran «anticuadas», por lo que cabía pensar en un nuevo principio de soberanía. Si para la izquierda la polarización llevaba a la revolución, para los adalides de la nueva doctrina transnacional, conducía a la instauración de dictaduras institucionales, provistas de técnicas represivas probadas y exitosas (como las de cuadrícula del territorio en zonas, subzonas, sectores y subsectores).⁷⁷ En este marco, el oxígeno para realizar ensayos

democráticos radicalizados era exiguo. Los propios militares chilenos –sin tradición golpista– terminaron reemplazando la defensa de las instituciones democráticas y republicanas por la defensa de la «chilenidad».

La lógica que llevó a muchos civiles, sobre todo jóvenes, a armarse y organizarse –la lógica del partisano– sufrió efectos de radicalización por la incidencia de las estrategias ideológicas, la influencia del espíritu de cruzada y la legitimación que a ese giro radical suministraba el militarismo de «los de arriba». Finalmente, la lógica del partisano fue devorada en el imperio del Golem.

En la agenda de los debates pendientes de la izquierda radicalizada de los 60 y 70, quedaron al menos cinco temas. El primero alude a la relación entre democracia y violencia revolucionaria.⁷⁸ La democracia supone pluralismo y deliberación, la violencia revolucionaria conduce –la experiencia histórica así lo acredita– a regímenes autoritarios y dictaduras que obturan el pluralismo y anulan –pese a su retórica– la deliberación. En clave de una lectura socialista, se podría añadir también que tiende a anular la autonomía de los actores colectivos. Por consiguiente, la centralidad de lo social en el camino de la desestatización soñada por Marx y Engels, deja paso al reforzamiento indefinido de los poderes burocráticos del Estado. O para decirlo en términos de Sartori: la dimensión horizontal de la política es avasallada.

Un segundo problema, vinculado con el anterior, remite a la relación entre organización partidaria y violencia revolucionaria. Ésta supone, desde un principio, una tensión entre el espíritu creativo y crítico de los militantes y el esquema vertical de mando obediencia que exige la actividad militar. Cuando ésta adquiere un estatus relevante, el primero tiende a ser desplazado a su mínima expresión en consonancia con un proceso por el cual la soberanía interna se concentra en la cúpula militarizada. La militancia sindical, barrial, y social en general, es concebida como una mera apoyatura de

las sedicente «vanguardia» que protagoniza la acción armada. Ello suponía, asimismo, relegar a un oscuro rincón el espíritu del mayo francés, –proclive al despliegue de la auto-organización y autodeterminación de los ciudadanos– reflejado por Jean Paul Sartre y los editoriales de *Les Temps Modernes*.

Un tercer tema alude a la relación entre democracia, represión y conciencia política. Frantz Fanon en su libro más famoso –*Los condenados de la tierra*– señalaba las bondades terapéuticas de la represión. Su principal virtud residiría en desenmascarar a los gobernantes, hacer visible lo oculto, explícito lo solapado, y en consecuencia –de acuerdo al hilo de este razonamiento– tendería a fortalecer la conciencia de los oprimidos. Esta forma de pensar, asumida como un dato dado de la realidad, influyó a favor de la lógica de la radicalización y, más específicamente, de prácticas políticas irresponsables, incapaces de hacerse cargo de las consecuencias de sus acciones.

Un cuarto tema remite a la tensión entre ética y violencia política, y más específicamente, entre teoría de la violencia –la convicción que no puede haber cambios sino a través de ella– y ejercicio personal de la misma. Cuando el camino de las armas no es una vocación –como en el caso de los militares profesionales– sino una obligación determinada por una determinada teoría o interpretación de la realidad, la resistencia a su ejercicio choca con los límites de quienes supuestamente deberían protagonizarla. La carta abierta de los tupamaros a dos agentes de policía –vista en páginas precedentes–, casi un pedido de disculpas por ejercer la violencia, muestra bien esa tensión entre medios violentos y fines acordes con una ética humanista. El revés del fenómeno es el militarismo. En consonancia con la racionalidad instrumental presente en la lógica de la guerra, se amplía el espacio para los menos escrupulosos.

La vía chilena al socialismo –la idea de conjugar, como dirían años después los eurocomu-

nistas, socialismo con libertad— dejó pendiente una quinta cuestión irresoluta: la tensión entre medios pacíficos y fines radicales. El ensayo de cambiar la sociedad a través de una sucesión de reformas efectuadas pacíficamente a través de sucesivos períodos de gobiernos democráticamente electos, tuvo a la postre, un resultado análogo al de los países vecinos: el golpe militar. Quizá, porque —aunque se respeten los procedimientos— intentar cambiar los fines sustantivos de una sociedad y crear un nuevo contrato social no resulta gratis.⁷⁹ Su viabilidad requiere actores con capacidad para construir una nueva hegemonía político cultural a través de esfuerzos crecientes y pacientes, así como de compromisos plurales. Por cierto, estas cuestiones son muy difíciles de concretar cuando lo que prima es la lógica de la radicalización o un imaginario de revolución.

A comienzos del siglo XXI, la violencia revolucionaria tal como la concibieron sus protagonistas en los años 60 y 70 del siglo XX, constituye una pieza de museo. Queda en pie, en cambio, algo más que los sueños de un mundo mejor: la voluntad de viejos y nuevos impugnadores del orden económico social —en América Latina marcado por la destrucción de la ciudadanía social— de avanzar en un camino que reúna en un mismo haz —como le hubiera gustado a Norberto Bobbio— lo mejor de la tradición democrática (la deliberación, las elecciones y el sistema de partidos), los mejores valores del liberalismo político (el Estado de Derecho y el ejercicio de mecanismos de control) y lo más visceral de la vocación socialista: la lucha por la igualdad.

NOTAS

¹ MENEGUELLO, Rachel, *PT A formacao de um partido 1979-1982*, San Pablo, Ed. Paz e Terra, 1989, pp. 62-63; *Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA, Informe 33/01, caso 11.552, Guerrilla del Araguaia, Julia Gómez Lund y otros, Brasil, 6 de marzo de 2001*; ANSALDI, Gualdo, «Continuidades y rupturas en un sistema de partidos políticos en situación de dictadura: Brasil, 1964-1985», en DUTRENIT, Silvia (coord.), *Diversidad*

partidaria y dictaduras: Argentina, Brasil y Uruguay, México D.F. Instituto Mora, 1996, pp. 133-134.

² *Summary Report of TDY to Uruguay by Byron Engle, Director Office of Public Safety, May 2-6, 1971*. NARA. USAID. OPS/IRG286, box 112, documento citado en ALDRIGHI, Clara, «La ingerencia de Estados Unidos en el proceso hacia el golpe de Estado. Informes de la misión de Seguridad Pública y la embajada en Montevideo (1968-1973)», en MARCHESI-MARKARIAN-RICO-YAFFE (comps.) *El Presente de la Dictadura. Estudios y reflexiones a 30 años del golpe de Estado en Uruguay*, Montevideo, Ed. Trilce, 2004, pp. 38,39 y 48. A principios de 1972, un informe enviado por la embajada norteamericana en Montevideo al departamento de Estado —presentado por el embajador Charles Adair— ratificaba el punto de vista precedente: los Tupamaros no eran una amenaza grave. *Ibid.*, pp. 40, 48, 49.

³ ALLENDE, Andrés Pascal, *El MIR chileno. Una experiencia revolucionaria*, Rosario, Ed. Cucaña, 2003, p. 37.

⁴ «Allende pidió que el MIR le aportara un grupo de compañeros con preparación militar para reforzar su seguridad». *Ibid.*, p. 49.

⁵ *Ibid.*, p. 81. Sobre esta temática puede consultarse GOICOVIC, Igor, «Violencia y poder en la estrategia política del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, 1967-1986», *Cuadernos Sociológicos. Tres décadas después. Lecturas sobre el derrocamiento de la unidad popular*, 3, Santiago de Chile, Universidad ARCIS, pp. 157-170.

⁶ *Defensa, revista internacional de ejércitos, armamento y tecnología*, n.º 13, p. 79, Madrid, 1979.

⁷ *Ibid.* p. 74.

⁸ CALVEIRO, Pilar, *Política y/o violencia*, Buenos Aires, Ed. Norma, 2005, pp.118-119.

⁹ Citado en SIDICARO, Ricardo, «El régimen autoritario de 1976: refundación frustrada y contrarrevolución exitosa», QUIROGA, Hugo y TCACH, César (comps.) *A Veinte años del Golpe. Con memoria democrática*, Rosario, Ed. Homo Sapiens, 1996, pp. 21-22.

¹⁰ Separata especial de la revista *Nueva Presencia*, «La mesa redonda que irritó a la derecha. Los años 70», p. 8, mayo de 1987.

¹¹ Véase O'DONNELL, Guillermo, *El Estado Burocrático Autoritario*, Bs. As., Ed. de Belgrano, 1982, pp. 51-52.

¹² CAETANO, Gerardo; RILLA, José, *Historia Contemporánea del Uruguay, Colonia, Ed. Fin de Siglo, Colección CLAEH*, 1994, pp. 257-273.

¹³ Esa influencia sobre el escenario electoral era mucho más difusa en Brasil, debido a la ausencia de identidades partidarias fuertes. No hubo partidos nacionales hasta 1945. DE RIZ, Liliana, «Política y partidos. Ejercicio de una análisis comparado: Argentina, Chile, Brasil y Uruguay», en *Desarrollo Económico*, n.º 100, Bs. As. IDES, 1986.

¹⁴ MOULIAN, Tomás y TORRES, Isabel, «La problemática de la derecha política en Chile, 1964-1983», en CAVAROZZI, Marcelo y GARRETÓN, Manuel Antonio, *Muerte y resurrección, Los partidos políticos en el autoritarismo y las transiciones del Cono Sur*, Santiago de Chile, FLACSO, 1989, p. 348.

- ¹⁵ MARINI, Ruy Mauro, *Subdesarrollo y revolución*, México, Ed. Siglo XXI, 1978, p. 51; sobre la articulación golpista de militares, empresarios y políticos, véase también ANSALDI, W., *op. cit.*, p. 94.
- ¹⁶ ALDRIGHI, C., *op. cit.*, pp. 40-41.
- ¹⁷ CAETANO Gerardo y RILLA, José, *Breve historia de la dictadura*, Montevideo, Ed. De la Banda Oriental, 1991, p. 17.
- ¹⁸ *La Prensa*, 23-3-1977; sobre los respaldos empresariales y eclesiásticos, TCACH, César, «Partidos políticos y dictadura militar en Argentina (1976-1983)» en DUTRENIT, S. (coord.), *op. cit.*, pp. 39-42.
- ¹⁹ Agradezco a Fernando Devoto, el haberme facilitado generosamente el borrador de sus reflexiones sobre la historia política de Brasil.
- ²⁰ MARINI, *op. cit.*, pp. 53-54.
- ²¹ MOULIAN, Tomás, *Conversación interrumpida con Allende*, Santiago de Chile, Ed. Universidad ARCIS, 1998, p. 19.
- ²² «El discurso remitía al pasado, repetía conceptos e invocaba valores e ideales que se estaban disolviendo, pero sin que emergiera todavía un discurso que diera cuenta de esas transformaciones de la conciencia política. Esa configuración ideológica donde una parte significativa de la experiencia no puede ser formulada, solamente es posible en las situaciones de crisis». Véase MOULIAN; TORRES, *op. cit.*, p. 352.
- ²³ Véase DRAKE, Paul, «Los movimientos urbanos de trabajadores bajo el capitalismo autoritario en el cono sur y Brasil 1964-1983», y RIAL, Juan, «Continuidad y cambio en las organizaciones partidarias en el Uruguay 1973-1984». Ambos trabajos están incluidos en el libro de CAVAROZZI, M. y GARRETÓN, M. A., *Muerte y Resurrección*, *op. cit.*
- ²⁴ A su juicio era necesario afianzar «un concepto radicalmente distinto al que descansa la clásica división de poderes de Montesquieu», véase CAETANO – RILLA, *op. cit.* (1994), p. 262.
- ²⁵ La mayor parte de los trabajadores industriales uruguayos estaba diseminado en pequeñas fábricas: el 90% empleaba menos de 20 trabajadores cada una. Véase, DRAKE, P., *op. cit.*, p. 91.
- ²⁶ DE RIZ, Liliana, *Retorno y derrumbe*, México, Ed. Folios, 1981, pp. 120-121. Véase también, JELIN, Elisabeth «Huelgas en Argentina», *Revista Mexicana de Sociología* n.º 2, 1978.
- ²⁷ *Manifiesto*, n.º 4, 1975, p. 17. Esta revista era publicada por Orientación Socialista, Movimiento de Activistas Socialistas 29 de Mayo, y Espartaco.
- ²⁸ *A la Clase Trabajadora – Defensa del Salario – Plena Ocupación – Democracia Sindical. Programa del Segundo Plenario General, 20 de julio de 1975*. Coordinadora de Gremios, Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados en Lucha de Capital y Gran Buenos Aires.
- ²⁹ Estimo probable, que la expresión «soberanía popular» incluida en el texto, haya sido resultado de una transacción entre quienes eran partidarios de una nueva convocatoria a elecciones y quienes consideraban que la soberanía popular se identificaba con formas de democracia directa.
- ³⁰ El frustrado plan económico del ministro Rodrigo culminó con su renuncia y la de López Rega.
- ³¹ Sobre este tema, véase la introducción y el capítulo I del libro de QUIROGA, Hugo, *El Tiempo del Proceso*, (segunda edición revisada y ampliada), Rosario, Ed. Homo Sapiens, 2004.
- ³² VILLEGAS, Osiris, *Guerra Revolucionaria Comunista*, pp. 9-11. He utilizado la edición de Ed. Pleamar, Bs.As. 1963.
- ³³ *Ibid.*, p. 163.
- ³⁴ *Diario Meridiano*, 9-7-1960. La IV División de Ejército tenía base en Córdoba.
- ³⁵ *Diario Córdoba* 2-12-1960. La II División de Ejército tenía base en Paraná.
- ³⁶ *La Voz del Interior*, 1-9-1961.
- ³⁷ *Los Principios*, 10-2-1961.
- ³⁸ El coronel Luis César Perlinger recordaba: «Ya en los tiempos del doctor Frondizi arribaron a nuestro país, a nuestro ejército, unas comisiones asesoras francesas. Eran los viejos legionarios de Indochina y de Argelia que venían a preparar a nuestras Fuerzas Armadas para luchar contra el pueblo». Separata de la revista *Nueva presencia*, doc. cit.
- ³⁹ ROBIN, Marie Monique, *op. cit.*, pp. 231 y 281. En la conferencia inaugural se sostuvo que los indiferentes cooperan conciente o inconcientemente con el enemigo. Esta idea tenderá a convertirse en un peligroso lugar común en el universo ideológico de los militares.
- ⁴⁰ *Diario de Sesiones, Honorable Cámara de Diputados. Congreso Nacional*. Tomo 3, pp. 2196-2197 (1964).
- ⁴¹ *Ibid.*, p. 2237.
- ⁴² Citado en RAPOPORT, Mario y LAUFER, Rubén, «Los Estados Unidos ante el Brasil y la Argentina. Los golpes militares de la década del 60», en EIAL volumen 11, n.º 2, Universidad de Tel Aviv, Israel.
- ⁴³ ROBIN, M., *op. cit.*, pp. 365-367.
- ⁴⁴ *Revista América Latina*, n.º 19, p. 26, octubre de 1973.
- ⁴⁵ *Nueva Presencia*, doc. cit.
- ⁴⁶ MORENO, Julio César, *La espuma de la cerveza*, Córdoba, Ed. El Emporio, 2005, p. 92; sobre el clima de época, véase FUENTES, Carlos, *Los 68 París-Praga-México*, Buenos Aires, Ed. Debate, 2005.



EL PASADO DEL PRESENTE

César Tcach

- ⁴⁷ DUTRENIT, Silvia, *Del margen al centro del sistema político: los partidos uruguayos durante la dictadura* en DUTRENIT, S. (coord.), *Diversidad partidaria y dictaduras: Argentina, Brasil y Uruguay*, *op. cit.*
- ⁴⁸ La MPS fueron aplicadas en una curva ascendentemente represiva en tres momentos: abril, octubre y diciembre de 1965. El texto de estas últimas, las más duras, es reproducido por FERNÁNDEZ HUIDOBRO, Eleuterio, *Historia de los Tupamaros*, Montevideo, Ed. de la Banda Oriental, 2004, tomo II, pp. 121-122.
- ⁴⁹ *Ibid.*, p. 131.
- ⁵⁰ En relación a estas interpretaciones, véase ACOSTA, Yamandú, «¿Por qué las dictaduras de los setenta en el Cono Sur?», en MARCHESI; MARKARIAN; RICO; YAFFE, *El presente de la dictadura*, cit., pp. 214-220; O'DONNELL, Guillermo, «Las Fuerzas Armadas y el estado autoritario del Cono Sur de América Latina», en O'DONNELL, *Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*, Bs. As., Ed. Paidós, 1997.
- ⁵¹ DE RIZ, Liliana, *op. cit.*
- ⁵² «MLN Tupamaros, Declaración de adhesión al Frente Amplio, 23 de diciembre de 1970», reproducida por GATTO, Hebert, *El cielo por asalto. El Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros) y la izquierda uruguaya (1963-1972)*, Montevideo, Ed. Taurus, 2004, p. 221. El destacado es mío.
- ⁵³ MOULIAN, Tomás. «Conversación...», *op. cit.*, p. 100.
- ⁵⁴ MARINLI, Ruy Mauro, *op. cit.* p. 21. El destacado es mío.
- ⁵⁵ Citado por GATTO, Hebert., *op. cit.*, p. 163.
- ⁵⁶ El documento n.º 1 fue reproducido por CAETANO, Gerardo; RILLA, José, *op. cit.* (1994), pp. 245-246.
- ⁵⁷ A los ejemplos señalados se le podría añadir el de Fernando Gabeira, militante del MR 8 (Movimiento Revolucionario 8 de octubre) y uno de los secuestradores del embajador norteamericano Charles Elbrick en 1969. Gabeira se integró al PT y, posteriormente, fue uno de los fundadores del Partido Verde. Con la instauración de régimen democrático llegó a ser diputado federal por Río de Janeiro.
- ⁵⁸ VERBITSKY, Horacio, *Ezeiza*, Buenos Aires, Ed. Planeta, 1998, p. 64.
- ⁵⁹ OLLIER, María Matilde, *La creencia y la pasión*, Buenos Aires, Ed. Ariel, 1998, p. 172.
- ⁶⁰ SERVETTO, Alicia. *De la Córdoba combativa a la Córdoba militarizada*, Córdoba, Ed. Ferreyra, 1998, p. 91.
- ⁶¹ E. USA.M a Secretario de Estado, Washington, Montevideo/2383, 29/9/1971, *Discusión with Mininterior Sena Re Counter Terrorism*, NARA,DS,PD/RG59, box 2662, reproducido por ALDRIGHI, Clara, *op. cit.*, p. 48.
- ⁶² Revista *América Latina* n.º 18, p. 19, mayo-junio de 1973.
- ⁶³ ALLENDE, Andrés Pascal, p. 79-81.
- ⁶⁴ ALTAMIRANO, Carlos, *Peronismo y cultura de izquierda*, Buenos Aires, Ed. Temas, 2001, p. 125.
- ⁶⁵ LANUSSE, Alejandro Agustín, *Mi testimonio*, Bs. As., Ed. Lasserre, 1977, pp. 134-135.
- ⁶⁶ GATTO, Hebert, *op. cit.*, p. 200.
- ⁶⁷ Sobre el papel de los cristianos de izquierda, véase el documento «Brasil, el golpe del 64 y la formación de la izquierda revolucionaria» en revista *América Latina* n.º 13, Bs.As. septiembre de 1971, pp. 13-22.
- ⁶⁸ Entrevista de Orlana Fallacci con Helder Cámara, reproducida por *El Heraldo dominical*, Barranquilla, 26 de septiembre de 1999. Edición digital 777.
- ⁶⁹ COHN, Norman, *En pos del Milenio*, Madrid, Alianza, 1983, p. 286.
- ⁷⁰ Sería interesante realizar un estudio sobre la influencia hebraica en el nacimiento de las FAR y en el desarrollo de pequeños grupos trotskistas como Política Obrera. Sobre los nexos entre la tradición conspirativa yrigoyenista y el universo de la izquierda de los 60, véase TCA-CH, César, *Radicalismo y Fuerzas Armadas (1962-1963). Observaciones desde Córdoba*, en *Desarrollo Económico* n.º 157, Bs. As., 2000.
- ⁷¹ TORRE, Juan Carlos, «A partir del cordobazo» en revista ESTUDIOS n.º 4, pp. 17-21. CEA, UNC, 1994.
- ⁷² «Carta abierta a los señores agentes de policía: Víctor Tomás Bentancor; Delfino Suárez de Lima»; MLN Tupamaros-diciembre de 1967. Reproducida por FERNÁNDEZ HUIDOBRO, Eleuterio, *op. cit.*, tomo III, pp. 216-218. El destacado es mío.
- ⁷³ *Ibid.*
- ⁷⁴ Este punto de vista ha sido sostenido por COSTA BONINO, Luis, en *La crisis del sistema político uruguayo*, Montevideo, Ed. Fundación de Cultura Universitaria, 1995.
- ⁷⁵ Entrevista del autor con uno de los secuestradores («Bigote»).
- ⁷⁶ MEYRINK, Gustav, *El Golem*, Buenos Aires, Editorial Futuro, 1945.
- ⁷⁷ Esta técnica de control represivo fue aplicada originariamente por los franceses en Argelia.
- ⁷⁸ Sobre la reactivación del debate acerca de la legitimación de la violencia política y sus consecuencias, véase MUÑOZ SORO, Javier, *Señas de Caín. Los discursos de la violencia política entre dictadura y democracia (1962-1982)*, en MATEOS, Abdón y HERRERÍN, Ángel (eds.), *La España del presente: de la dictadura a la democracia*, Madrid, Historia del Presente, 2005.
- ⁷⁹ Tomás Moulian, *op. cit.*, p. 107.

